

Señores:

JUZGADO PRIMERO (1°) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

cmpl01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO VERBAL
RADICADO: 110014003001-2024-00379-00
DEMANDANTE: HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ
DEMANDADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTROS

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado general de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, sociedad anónima de seguros, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, identificada con **NIT No. 860.026.182-5**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., según consta en el certificado de existencia y representación legal que se anexa, en donde figura inscrito el poder general conferido al suscrito a través de la Escritura Pública No. 5107, otorgada el 05 de mayo de 2004 en la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que procedo en primer lugar a **CONTESTAR LA DEMANDA** formulada por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ y en segundo lugar a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTIA** formulado por la demandada INVERSIONES CADAL S.A.S. en contra de mi representada, anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

Conforme se expondrá a lo largo de la contestación, el accidente de tránsito objeto de litis se generó por la conducta de un tercero, pues con el Informe Policial de Accidente de Tránsito y Informe Técnico¹ que se aporta con el presente escrito, se logra evidenciar que fue el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.134.375 y quien ostentaba la calidad de conductor del vehículo de placas HGN819, quien invadió el carril donde transitaba el tractocamión de placas ERK397 y como consecuencia de esa primer colisión se generó la segunda colisión ente el vehículo asegurado y el bus de placas WEL820 en donde se transportaba como pasajero el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ. En ese sentido se hace imprescindible que el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ sea vinculado al presente proceso conforme lo preceptúa el artículo 61 del Código General del Proceso, que dispone:

“ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. *Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los

¹ Informe Técnico No. 22772 elaborado por la OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES S.A.S. - NBI

citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término (...)”.

Así pues, de la lectura del artículo 61 del Código General del Proceso es claro que dadas las particularidades del caso y como quiera que en el presente asunto se discute la presunta responsabilidad de los hechos acaecidos el día 29 de agosto de 2022, que debe tomarse en consideración el vincular al señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ a fin de que conforme la litis y este juzgador profiera una decisión en derecho.

CAPÍTULO I CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO PRIMERO: En la medida que en este numeral se incorporan distintos supuestos fácticos, para dar respuesta adecuada, se procede a separarlos de la siguiente manera:

- Es cierto que el vehículo de placas ERK397 se encontraba amparado por la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, la cual fue emitida por ALLIANZ SEGUROS S.A.

- Parcialmente cierto. Se observa que es cierto según el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C – 1478387, que el accidente que dio origen al presente litigio ocurrió el día 29 de agosto de 2020, en el kilómetro 24 + 800mts, sobre la vía Barranquilla - Santa Marta y que dentro del mismo se vieron involucrados, tanto el vehículo anteriormente mencionado, como el vehículo de placas WEL820. No obstante, pasa por alto el demandante, mencionar que en dicho accidente estuvieron involucrados otros dos vehículos adicionales. Es decir, desde este momento deberá indicarse que, conforme a las pruebas obrantes en el plenario,

estuvieron involucrados 4 vehículos en el suceso, a saber: La tractomula de placas ERK397, la tractomula de placas XVI933, el bus de placas WEL820 y el rodante de placas HGN819.

Ahora, se pone de presente al Despacho que, el accidente de tránsito se produjo cuando el vehículo de placas HGN819, conducido por señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, invadió el carril donde transitaba el tracto camión de placas ERK397, generando así la colisión que provocó que el conductor de este último perdiera el control y chocara con el bus de placas WEL820 en el que se transportaba el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

AL HECHO SEGUNDO: No es cierto, pues tal como ha sido expuesto, recae sobre el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ la responsabilidad del accidente, en tanto fue quien desatendió las medidas mínimas necesarias de prevención y seguridad al invadir el carril donde transitaba el tracto camión de placas ERK397, es decir que, de manera voluntaria, fue el conductor del vehículo de placas HGN819 quien asumió un riesgo que a la postre se materializó en las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, pues decidió conducir el automotor violando las normas de tránsito existentes, con lo cual, sumado a que la conducción de vehículos está considerada como una actividad de alto riesgo, se tiene que aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido, siendo que el mismo fue el generador de la situación de peligro para el bien jurídico de la vida e integridad personal.

De manera que el accidente no podrá atribuírsele a los demandados en este proceso, como quiera que es claro que el mismo acaeció como consecuencia de una conducta imprudente del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, quien gestó la causa de las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ configurando la causal excluyente de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”.

AL HECHO TERCERO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues

se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

AL PARÁGRAFO DEL HECHO TERCERO: No es cierto. Deberá tomar en consideración el Despacho el ánimo inescrupuloso con el cual la parte actora efectúa aseveraciones temerarias que carecen abiertamente de sustento probatorio, habida cuenta que dentro del Informe Policial de Accidente de Tránsito, no se estipuló que la hipótesis de accidente fuera atribuible al conductor del vehículo de placas ERK397, pues si bien al interior del precitado informe se codificó la causal número 104 que corresponde a “adelantar invadiendo el carril contrario”, esta no se atribuyó a alguno de los vehículos, tal como se observa:

11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO					
DEL CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/> 104 <input type="checkbox"/>	DEL VEHICULO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEL PEATON	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DE LA VIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEL PASAJERO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OTRA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ESPECIFICAR ¿CUAL?			
12. TESTIGOS					
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACION No	DIRECCION Y CIUDAD	TELÉFONO	

Sin embargo, se debe resaltar que, de conformidad con lo trazado en el Bosquejo Topográfico, lo dispuesto en el Informe Técnico y la declaración de los conductores de los vehículos involucrados, es posible afirmar que la hipótesis descrita por los agentes de tránsito corresponde al vehículo de placas HGN819, pues fue este quien invadió el carril donde transitaba el vehículo de placas ERK397.

FRENTE AL PARÁGRAFO DEL HECHO TERCERO. No es cierto que se haya codificado al vehículo número 3, pues como su Despacho podrá observar en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, se codificó la hipótesis probable número 104 que corresponde a “adelantar invadiendo el carril contrario”, sin que se haya atribuido la misma a algún vehículo, a saber:

11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO					
DEL CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEL VEHICULO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEL PEATON	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DE LA VIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEL PASAJERO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OTRA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ESPECIFICAR ¿CUAL?			
12. TESTIGOS					
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO	

Por lo anterior, es claro que no puede indicarse que la hipótesis corresponde a algún vehículo específico, cuando la autoridad únicamente hizo una mención genérica de la hipótesis sin atribución a algún vehículo. Tenga en cuenta su Despacho que en este caso nos encontramos ante la concurrencia de actividades peligrosas, teniendo en cuenta que los cuatro vehículos se encontraban en movimiento y circulación, por tanto, se anula la presunción de culpa, obligando al demandante a probar su dicho por convertirse en un asunto que debe ser analizado bajo el régimen de culpa probada.

AL HECHO CUARTO: No es cierto. No puede entenderse que la causa del accidente de tránsito objeto de litis fue la presunta conducta del señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, quien alega la parte demandante *“no se encontraba atento a la vía, pues se sustrajo de la obligación de diligencia, precaución y cuidado exigidas en la ejecución de la actividad”*. Ello constituye una aseveración que carece abiertamente de sustento probatorio, en la medida que no se allega con el acervo probatorio elemento alguno con el cual acreditar que en efecto el conductor del vehículo de placas ERK397 desatendió las normas de tránsito, pues lo único que se demuestra es el ánimo fantasioso del extremo actor por fundar la tesis que erradamente ha sostenido de cara a obtener una indemnización que no le corresponde, pues fue el conductor del vehículo de placas HGN819 quien ocasionó el accidente.

Lo anterior se corrobora con el Bosquejo Topográfico que hace parte del Informe Policial de Accidente de Tránsito, y principalmente con el Informe Técnico que se aporta con el presente escrito, en donde se evidencia que el accidente de tránsito se produjo cuando el vehículo de placas HGN819, conducido por señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, invadió el carril donde

transitaba el tracto camión de placas ERK397, generando así la colisión que provocó que el conductor de este último perdiera el control y chocara con el bus de placas WEL820 en el que se transportaba el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

AL HECHO QUINTO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

FRENTE AL HECHO SEXTO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que el dictamen pericial aportado indica que el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral del 30.93%. Sin embargo, en el Registro Único de Afiliados – RUAF existe un antecedente de pensión de invalidez reconocida al actor en el año 1990 por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es decir que, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ ya contaba con una calificación previa con un porcentaje superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. En ese sentido, el dictamen aportado y elaborado por el Dr. LUIS EDUARDO SAAVEDRA no genera certeza sobre el presupuesto a acreditar y por el contrario es cuestionable la elaboración de este y su eventual resultado, pues nótese como dentro de la experticia ni si quiera se tuvo en cuenta los dictámenes previos, como se visualiza a continuación:

5. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN		
5.1 RELACIÓN DE DOCUMENTOS		
DOCUMENTO	SE TUVO EN CUENTA	
Historia Clínica	X	
Epicrisis o Resumen de Historia Clínica	X	
Exámenes Paraclínicos	X	
Dictámenes y otros		
5.2 DIAGNÓSTICO MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN		
No.	DIAGNÓSTICO	CODIGO CIE-10

En consecuencia, este Despacho debe tener en consideración que el dictamen de pérdida de capacidad laboral es cuestionable, en la medida que no tuvo en cuenta los anteriores dictámenes a través de los cuales se calificó al demandante conforme la pensión de invalidez reconocida; y, en igual forma, precisamente porque cuenta con esta pensión es evidente que el actor tuvo que haber sido calificado previamente con una pérdida de capacidad laboral igual o superior 50%, por lo que es claro que el porcentaje contemplado dentro de la experticia aportada debiera ser superior al 30.93%.

AL HECHO SÉPTIMO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

AL HECHO OCTAVO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que mediante el pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección

Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano, se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. Conforme a lo anterior, se debe advertir que para que se reconozca el perjuicio alegado el demandante deberá acreditarlo. En este caso al no haber prueba cierta de los ingresos del señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, no podrá reconocerse ningún tipo de suma por concepto de lucro cesante.

Por otra parte, para la fecha de los hechos, la víctima tenía más de 70 años y contaba con pensión de invalidez conforme a la información contenida en el Registro Único de Afiliados - RUAF:

PENSIONADOS				Fecha de Corte: 2024-09-20		
Entidad Pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de Pensión	Estado	Tipo de Pensionado	Fecha Resolución	Número Resolución Pension PG
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	INVALIDEZ POR RIESGO COMUN	Activo	Régimen de prima media con tope máximo de pensión	1990-01-01	123

De tal suerte, que en el caso sub judice no puede presumirse el lucro cesante a favor del demandante como consecuencia de la supuesta responsabilidad civil extracontractual, habida cuenta que (i) no existe prueba de la actividad económica desempeñada por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ para el momento del accidente, y (ii) en todo caso, es posible corroborar que el demandante cuenta con una pensión de invalidez desde el año 1990, por ello no existe disminución alguna en sus ingresos.

FRENTE AL HECHO NOVENO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura de venta aportada al plenario como “soporte” de este hecho no cumple con los requisitos del Estatuto Tributario, razón por la cual no podrá ser tenida en cuenta.

AL HECHO DÉCIMO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, este Despacho debe tener en consideración que el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado es a todas luces cuestionable, en la medida que no tuvo en cuenta los anteriores dictámenes a través de los cuales se calificó al demandante conforme la pensión de invalidez reconocida; y, en igual forma, debido a que precisamente porque cuenta con esta pensión es evidente que el demandante tuvo que haber sido calificado previamente con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Por lo que es claro que dentro de la experticia que se aporta no se tuvieron en cuenta las razones por las cuales se adjudicó dicho porcentaje en el momento que el demandante fue calificado para obtener la pensión de invalidez. Por lo expuesto, es claro que el dictamen aportado es inconducente e impertinente, porque no existe justificación alguna por la cual el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ cuenta con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al que se le tuvo que otorgar para la adquisición de la pensión de invalidez.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por ALLIANZ SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

FRENTE AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO. No es cierto tal y como está expuesto. En primer lugar, la solicitud de indemnización presentada por el actor no cumple los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio, pues conforme con lo allí señalado, existen elementos esenciales para que se predique la ocurrencia de un siniestro sin los cuales podrá la Aseguradora adentrarse a adoptar una postura. Así las cosas, al no acatarse la obligación legal en cabeza del señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, de demostrar con elementos o pruebas suficientes, la ocurrencia del siniestro mediante la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida que pretende se le reconozca como indemnización por parte de la Compañía Aseguradora, es claro que no ha nacido la obligación condicional de ALLIANZ SEGUROS S.A.

En segundo lugar, mediante comunicado fechado del 01 de enero de 2024, ALLIANZ SEGUROS S.A. dio respuesta a la solicitud presentada por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, mencionando expresamente que se objetaba el pago por no existir certeza de la responsabilidad del asegurado en el accidente.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

ME OPONGO a la totalidad de las pretensiones incoadas por la parte demandante, por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una presunta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró, por cuanto la parte accionante no asistió a su deber procesal de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro. Siendo así, en este proceso se incumplieron las cargas imperativas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio.

Aunado a lo anterior, no es posible predicar responsabilidad alguna al extremo pasivo, toda vez que: Primero, es clara la configuración de la causal eximente de responsabilidad denominada

“hecho de un tercero”, toda vez que recae en cabeza del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ el accidente ocurrido el 29 de agosto de 2022. Segundo, no existe un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ y las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, pues en este caso al encontrarse acreditada la existencia de una causa extraña eximente de causalidad se encuentra desvirtuada la existencia de dicho nexo causal.

III. OPOSICIÓN FRENTE A TODAS LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y DE CONDENA

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO a que se declare la responsabilidad civil, solidaria y extracontractual de los demandados en este caso, toda vez que en este caso no se encuentra demostrada la responsabilidad civil del señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, por cuanto operó la causal excluyente de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”, configurada al recaer en cabeza del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ el accidente ocurrido el 29 de agosto de 2022.

En cualquier caso, vale la pena aclarar que el nexo causal que pretende hacer valer la parte demandante en este proceso se encuentra completamente desvirtuado, cuando es dable concluir que la ocurrencia del accidente surgió por el actuar del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, en tanto fue quien desatendió las medidas mínimas necesarias de prevención y seguridad al invadir el carril donde transitaba el tracto camión de placas ERK397, es decir que, de manera voluntaria, fue el conductor del vehículo de placas HGN819 quien asumió un riesgo que a la postre se materializó en las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, pues decidió conducir el automotor violando las normas de tránsito existentes, con lo cual, sumado a que la conducción de vehículos está considerada como una actividad de alto riesgo, se tiene que aumentó de manera desproporcionada el riesgo permitido, siendo que el mismo fue el generador de la situación de peligro para el bien jurídico de la vida e integridad personal. Razón por la cual,

se desvirtúa cualquier tipo de causalidad que quiera hacer valer la parte demandante y como consecuencia, no podría endilgársele al extremo pasivo ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA. ME OPONGO a que se declare la responsabilidad civil contractual de ALLIANZ SEGUROS S.A., por cuanto mi procurada no suscribió contrato alguno con el demandante; y, en la medida que en el caso de marras no se estructuró la responsabilidad deprecada, pues no existe un nexo causal entre la conducta desplegada por el conductor del vehículo asegurado y la ocurrencia del accidente. Contrario sensu a ello, nos encontramos ante la configuración de una causal exonerativa de responsabilidad entendida como el “hecho de un tercero”, en tanto en accidente se produjo como consecuencia la conducta irresponsable, negligente e imprudente del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, quien conducía el vehículo de placas HGN819.

Al respecto se aclara que, si bien ALLIANZ SEGUROS S.A. emitió la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, lo cierto es que no se ha realizado el riesgo asegurado en el precitado contrato de seguro, esto es, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado y en ese orden de ideas, es claro que no ha nacido la obligación condicional de la Compañía Aseguradora.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA. ME OPONGO a que se declare la responsabilidad civil extracontractual de ALLIANZ SEGUROS S.A., dado que si bien fue esta quien emitió la Póliza No. 023128783 / 35, lo cierto es que no se ha realizado el riesgo asegurado, en tanto no se estructuró la responsabilidad que se deprecá, habida cuenta que no existe un nexo causal entre la conducta del conductor del vehículo asegurado y la ocurrencia del accidente. Contrario sensu a ello, nos encontramos ante la configuración de una causal exonerativa de responsabilidad entendida como el “hecho de un tercero”, en tanto en accidente se produjo como consecuencia la conducta irresponsable, negligente e imprudente del señor DIEGO ANDRÉS

ARBOLEDA YAÑOZ, quien conducía el vehículo de placas HGN819.

FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA. ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores pretensiones, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente a ALLIANZ SEGUROS S.A. Sin perjuicio de ello, no es procedente que exista reconocimiento alguno por concepto de perjuicios materiales, para lo cual es menester efectuar los siguientes pronunciamientos:

A. PERJUICIOS PATRIMONIALES

- **Oposición frente al DAÑO EMERGENTE**

No es procedente el reconocimiento de perjuicios por concepto de daño emergente, en tanto, la parte demandante manifiesta que se generó una erogación por la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$600.000) por la elaboración del dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, dicho concepto no puede ser procedente, debido a que no es un gasto que se derive del accidente de tránsito del 29 de agosto de 2022, por lo que no hay prueba si quiere sumaria de la existencia del daño emergente en la suma que se alega, por el contrario, lo que se evidencia es que el extremo actor basa su petición en una mera aseveración sin fundamento probatorio alguno.

Por otra parte, debe tenerse en consideración que el documento que se aporta junto con la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario para que sea considerada factura, específicamente en lo concerniente a no contar con “**h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura**”, y al no cumplirse con el requisito en mención, es inviable que este Despacho acredite con tal documento el perjuicio material alegado por la parte actora.

- **Oposición frente al LURO CESANTE:**

Es inviable el reconocimiento de suma alguna por concepto de lucro cesante, en tanto no existe prueba si quiera sumaria de los elementos estructurales del mismo. En primer lugar, el demandante no acredita sus ingresos, ni mucho menos la disminución de estos como consecuencia del accidente de tránsito. En segundo lugar, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ para la fecha del accidente de tránsito contaba con más de 70 años, por lo que no era una persona activa laboralmente. En tercer lugar, la única prueba que aporta con la cual pretende le sea reconocido el lucro cesante es el dictamen de pérdida de capacidad labora, el cual es **(i)** impertinente, por cuanto en este claramente no se evidencia la disminución en sus ingreso e **(ii)** inútil, puesto que no genera la certeza sobre el supuesto de hecho que pretende acreditar, ya que dentro de dicha experticia no se tuvo en cuenta factores previos del demandante; e, **(iii)** Inconducente, si se toma en consideración que dicho “dictamen” no tuvo en cuenta si quiera los dictámenes de pérdida de capacidad previos del demandante. En cuarto lugar, no será procedente el reconocimiento del lucro cesante con ocasión a la pérdida de capacidad laboral mencionada en la demanda, toda vez que el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ goza de una pensión de invalidez desde el año 1990 y dicha prestación no ha sido menguada por el accidente de tránsito objeto de litigio.

B. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

- **Oposición frente al DAÑO MORAL**

No hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de daños morales en favor del extremo actor, dado que no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto. Además, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es exorbitante, y en tal sentido, en el improbable e hipotético caso que dicho concepto sea reconocido, no hay lugar al pago de suma alguna que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

- **Oposición frente al DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN**

Con relación al daño a la vida en relación, el mismo es improcedente por cuanto no es posible declarar la responsabilidad por parte de las entidades demandadas, por el contrario, a lo largo de este escrito se ha puesto de presente que en el caso de marras no resulta posible una declaración de responsabilidad por ausencia de prueba del nexo causal.

Por otra parte, es evidente el ánimo especulativo y la errónea tasación del daño a la vida en relación, en tanto el mismo resulta exorbitante. Lo anterior, como quiera que se deriva de una estimación excesiva y lejana a los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia y en la medida que deviene de un dictamen que a todas luces presenta múltiples inconsistencias, por lo que no podrá tenerse en consideración.

FRENTE A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores pretensiones, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente a ALLIANZ SEGUROS S.A.

Adicionalmente, esta pretensión es a todas luces anti-técnica. Ello, porque no puede acumularse la indexación monetaria con el pago de los intereses puesto que ambos conceptos tienen la misma finalidad, la cual es paliar el poder adquisitivo del dinero. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia, en un caso que se puede aplicar análogamente al presente, afirmó:

*“(…) Puestas de ese modo las cosas, puede concluirse que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de éstos, puesto que, si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. **Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se,***

equivaldría a decretar una doble –e inconsulta- condena por un mismo ítem,
*lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, (...)*² – (Subrayado y
negrilla por fuera de texto)

Así las cosas, además de lo que ya se establecido, esta pretensión no debe ser tenida en cuenta pues la indexación de la moneda no se puede acumular con los intereses moratorios.

FRENTE A LA PRETENSIÓN QUINTA: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores pretensiones, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente a ALLIANZ SEGUROS S.A.

Frente al momento en el que se empiezan a causarse los intereses moratorios, la Corte Suprema de Justicia ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente:

“Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo”

Lo anterior, deja claro que la pretensión de la demandante en este caso no tiene vocación de prosperidad, puesto que los intereses moratorios podrían empezar a causarse solo hasta que el fallo judicial brinde certeza sobre la obligación. Toda vez que antes de proferirse el fallo, no existe

² Corte Suprema de Justicia. Sentencia 41392. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.

certeza sobre la obligación de indemnizar.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEXTA: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores pretensiones, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente a ALLIANZ SEGUROS S.A. En su lugar, solicito condena en costas y agencias en derecho para la parte demandante.

IV. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Objeto el juramento estimatorio presentado por el demandante de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso. Ahora bien, debe decirse que no se hará referencia a los perjuicios extrapatrimoniales, toda vez que el citado artículo indica expresamente que: *“El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales”*. En virtud del precitado, en esta objeción no se hará alusión a los mismos.

En cuanto a la categoría de daños patrimoniales o materiales objeto su cuantía en atención a que la parte demandante no cumplió su carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso, puesto que no aportó prueba detallada del perjuicio cuya indemnización deprecia. En primer lugar, debe decirse que no resulta procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de sumas de dinero por concepto de lucro cesante, habida cuenta que el demandante no acredita sus ingresos, ni mucho menos la disminución de estos como consecuencia del accidente de tránsito. En segundo lugar, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ para la fecha del accidente de tránsito contaba con más de 70 años, por lo que no era una persona activa laboralmente. En tercer lugar, la única prueba que aporta con la cual pretende le sea reconocido el lucro cesante es el dictamen de pérdida de capacidad labora, el cual es *(i)* impertinente, por cuanto en este claramente no se evidencia la disminución en sus ingreso e *(ii)* inútil, puesto que no genera la certeza sobre el supuesto de hecho que pretende acreditar, ya que dentro de dicha experticia no se tuvo en cuenta factores previos del

demandante; e, (iii) Inconducente, si se toma en consideración que dicho “dictamen” no tuvo en cuenta si quiera los dictámenes de pérdida de capacidad previos del demandante. En cuarto lugar, no será procedente el reconocimiento del lucro cesante con ocasión a la pérdida de capacidad laboral mencionada en la demanda, toda vez que el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ goza de una pensión de invalidez desde el año 1990 y dicha prestación no ha sido menguada por el accidente de tránsito objeto de litigio.

Por otra parte, respecto al daño emergente, no hay prueba si quiere sumaria de la existencia del daño, por el contrario, lo que se evidencia es que el extremo actor basa su petición en una mera aseveración sin fundamento probatorio alguno. Asimismo, debe tenerse en consideración que el documento que se aporta junto con la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario para que sea considerada factura, específicamente en lo concerniente a no contar con “**h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura**”, y al no cumplirse con el requisito en mención, es inviable que este Despacho acredite con tal documento el perjuicio material alegado por la parte actora. En ese sentido, al no existir prueba si quiera sumaria de los ingresos dejados de percibir por parte del demandante, no resulta procedente este reconocimiento.

En este orden de ideas, es preciso reiterar que la parte demandante tenía entre sus mandatos, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sobre este particular ha establecido lo siguiente:

“(...) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio

*reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, **y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración**, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.³ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(...) **la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso**; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (...)”⁴(Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En efecto, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencialmente que no es dable presumir los daños patrimoniales, sino que este concepto debe probarse dentro del proceso, carga que le asiste únicamente al reclamante. De manera que en el caso de marras no puede existir reconocimiento a los perjuicios reclamados, en tanto que no obra en el proceso prueba que dé cuenta de las sumas solicitadas en el petitum de la demanda. Máxime, cuando los pronunciamientos precitados indican que la existencia de los perjuicios no puede presumirse, sino que debe mediar prueba que acredite suficientemente su causación.

En conclusión, no es procedente el reconocimiento de lucro cesante y daño emergente, por tanto, no se acreditan los elementos para que se configuren dichos perjuicios. De modo tal, que al no encontrarse probados los perjuicios que alega en el juramento estimatorio, es jurídicamente improcedente su reconocimiento, tal y como lo han señalado los pronunciamientos jurisprudenciales

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. Mp. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. Mp Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736.

citados en líneas precedentes. Por las razones antes expuestas, me opongo enfáticamente al juramento estimatorio de la demanda.

V. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

La defensa de mi representada se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA RESPONSABILIDAD

1. EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS POR CONFIGURARSE LA CAUSAL “HECHO DE UN TERCERO”.

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados, como quiera que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho de un tercero”, en tanto que fue el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, quien desatendió las medidas mínimas necesarias de prevención y seguridad al invadir el carril donde transitaba el tracto camión de placas ERK397, generando así la colisión que provocó que el conductor de este último perdiera el control y chocara con el bus de placas WEL820 en el que se transportaba el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ. Es decir, que en la ocurrencia del accidente tuvo injerencia significativa el actuar de quien se encontraba conduciendo el vehículo de placas HGN819. Por lo que no podría entonces intentar endilgarse responsabilidad a los demandados cuando en el presente caso se encuentra clara la configuración de una causal exonerativa de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero.

Dicho esto, es importante anotar que el hecho de un tercero hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad. De modo tal que la conducta del tercero ajeno a las partes, que sea imprevisible e irresistible y que desempeñe un papel exclusivo o esencial en el cumplimiento de los débitos del oferente, reviste la calidad de excusar la responsabilidad de a quien se le atribuye el daño. Frente a lo anterior y antes de entrar a estudiar la aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad al caso concreto, es necesario hacer referencia a la señalada norma del artículo 64 del Código Civil y posteriormente, hacer un recorrido por los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes con los cuales se le ha dado desarrollo a la figura del hecho de tercero, como causal que enerva la responsabilidad.

“ARTÍCULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisible o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” - (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2008, fue enfática al señalar que:

“(...) cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerante de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible”⁵

Al respecto, es necesario complementar con lo señalado por la Jurisprudencia del Consejo de Estado⁶, quien se ha pronunciado sobre el hecho del tercero, así:

⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2005. Expediente No. 11001-3103-003-1995-07113-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla.

⁶ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez.

“Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma **se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación de aquel**” - (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Así también, en pronunciamiento más reciente, señaló el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo⁷ que:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.

(...)

Por otra parte, **a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no,**

⁷ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP. Mauricio Fajardo Gómez.

injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, (...)” - (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por su parte, la doctrina al respecto de hecho del tercero señala que:

“Esta causa de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad (...) jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria”⁸

En ese orden de ideas, es claro que el hecho de tercero es aquel elemento de ruptura del nexo causal entre el acto u omisión del agente y el daño que se le imputa. Por tanto, entremos a estudiar cada uno de sus requisitos a la luz del caso concreto:

(i) Irresistibilidad

Resulta importante señalar que para el conductor del vehículo de placas ERK397 era imposible resistirse a la imprudencia del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, quien era el conductor del vehículo de placas HGN819. Máxime, cuando su actuar (invadir carril) resulto abrupto y repentino, lo que confirma en total medida que para el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ

⁸ ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Actuaciones por daños. Ed. Hammurabi, BA. Pág. 172. Del artículo de PATIÑO. Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual.

resultaba totalmente irresistible la falta de prudencia y diligencia con la que conducía el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ para el momento de los hechos. Por tanto, es dable concluir que la imprudencia y negligencia de un conductor que se movilizaba en vías de amplia circulación en un vehículo de alta peligrosidad sin atender las normas de tránsito se constituyó como una conducta irresistible para el conductor del vehículo de placas ERK397.

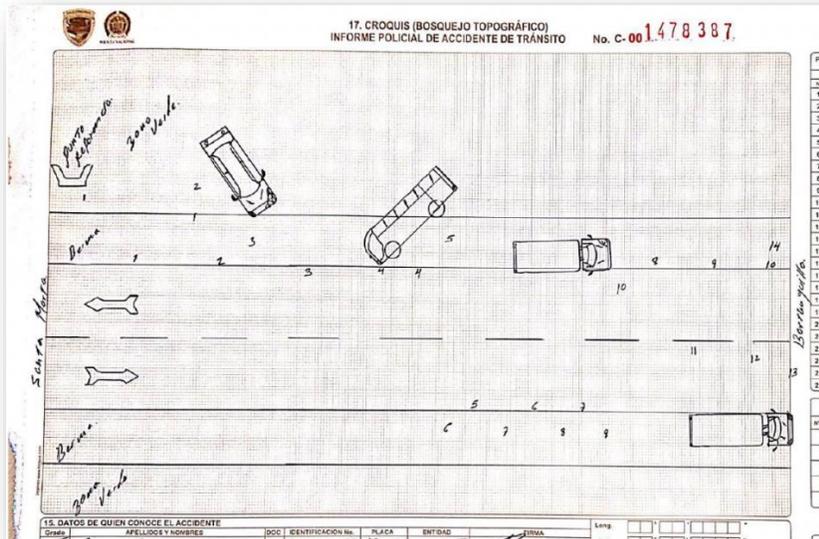
Igualmente, debe mencionarse que la pérdida de control del tracto camión asegurado, que se generó por la conducta imprudente del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, fue lo que ocasionó la colisión con el bus de placas WEL820. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aun así, el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ intentó realizar maniobras de reacción, pues procuró recuperar el control del tracto camión. No obstante, ante el tamaño de ambos vehículos, es irresistible que no se produjera la colisión entre estos y como consecuencia de ello, las lesiones del hoy demandante, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

(ii) Imprevisibilidad

En segundo lugar, es necesario señalar que para el conductor del vehículo de placas ERK397, era totalmente imposible prever que en el lugar donde ocurrió el accidente, aún y cuando este se desplazaba en total atención de las normas de tránsito y en su deber de cuidado y pericia frente a las características y dimensiones del vehículo conducido, el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, incurriría en una conducta negligente, por cuanto no transitaba por el carril que le correspondía, pues como se evidencia en los medios probatorios, invadió el carril donde transitaba el vehículo de placas ERK397. Lo anterior, es posible acreditarlo a través del Informe Policial de Accidente de Tránsito el cual codificó como hipótesis probable del accidente la número 104 que corresponde a “adelantar invadiendo el carril contrario”, como a continuación se ilustra:

11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO					
DEL CONDUCTOR	104	DEL VEHICULO		DEL PEATON	
		DE LA VIA		DEL PASAJERO	
OTRA		ESPECIFICAR ¿CUAL?			
12. TESTIGOS					
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACION NO	DIRECCION Y CIUDAD	TELÉFONO	

Por otra parte, en el Bosquejo Topográfico se encuentra también plenamente demostrado que fue el vehículo de placas HGN819 quien invadió el carril donde transitaba el automotor de placas ERK397, asegurado por ALLIANZ SEGUROS S.A., lo que generó la colisión con el bus, veamos:



En el croquis se ilustran cuatro vehículos que estuvieron involucrados en el accidente, sobre los cuales se evidencia su trayectoria y conductas dentro del suceso del 29 de agosto de 2022:

- Vehículo No. 1: Corresponde al de placas HGN819, que era conducido por el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, quien tal como ha sido altamente expuesto, invadió el carril contrario, generando así la colisión con los demás rodantes.

En primer lugar, debe señalarse que este se dirigía de Barranquilla hacia Santa Marta. Sin embargo, en su trayectoria, decidió realizar una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario (Santa Marta - Barranquilla), en donde transitaban los tractocamiones de placas XVI933 y ERK397. Debido a ello, generó una primera colisión con el rodante de placas XVI933 y posteriormente con el de placas ERK397, lo que acto seguido ocasionó que este último perdiera el control y chocara con el bus de placas WEL820, en donde se transportaba el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

Como es posible evidenciar, una vez el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, conductor del vehículo de placas HGN819, invade el carril contrario para realizar la maniobra de adelantamiento, choca con la tractomula asegurada haciéndola perder el control y generando posteriormente que esta y el bus de placas WEL820 colisionaran, lo que ocasionó las lesiones del señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

- Vehículo No. 2: corresponde al bus de placas WEL820 conducido por el señor ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS y en el que se transportaba el hoy demandante.

Debe señalarse que el señor ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS, transitaba en la vía Barranquilla - Santa Marta, cuando evidenció que el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ invadió el carril contrario, provocando que el vehículo de placas ERK397 perdiera el control dirigiéndose hacia él, por lo que, aunque intentó realizar una maniobra evasiva, la tractomula lo golpeó en el costado izquierdo.

- Vehículo No. 3: Corresponde al tracto camión de placas ERK397 conducido por el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, el cual se encuentra asegurado por ALLIANZ SEGUROS S.A.

El señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ transitaba acatando las normas de tránsito en la vía Santa Marta - Barranquilla, sin embargo, de repente visualiza como de manera intempestiva el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ invade su carril y el del vehículo de placas XVI933 en sentido contrario, generando la colisión. Debido a ello, pierde el control dirigiéndose hacia la vía Barranquilla – Santa Marta y golpeando así la parte delantera izquierda del tracto camión con el bus de placas WEL820:

Formulario de identificación de vehículo con los siguientes datos manuscritos:

ESPECIAL OCASIONAL	<input type="checkbox"/>	por comercio														
ESPECIAL RADIO DE ACCIÓN	<input type="checkbox"/>															
NACIONAL	<input type="checkbox"/>															
MUNICIPAL	<input type="checkbox"/>															
DE MERCANCIA	<input type="checkbox"/>															
ES	<input type="checkbox"/>	BOCINA	<input type="checkbox"/>	LLANTAS	<input type="checkbox"/>	SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	OTRA	<input type="checkbox"/>							
POSTERIOR	<input type="checkbox"/>															
VEHICULO 4																
CONDUCTOR	Orlando	EPIC	C	IDENTIFICACION NO	77036133	NACIONALIDAD	Colombia	FECHA DE NACIMIENTO	22/1/63	SEXO	M	GRAVEDAD	MUERTO	<input type="checkbox"/>	HERIDO	<input type="checkbox"/>
CUIDAD		TELEFONO		SE PRACTICO EXAMEN		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	GRUPO		LA. REGISTRADA				

Conforme a lo anterior es posible evidenciar las siguientes acciones:

1. El señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, conductor del tracto camión ERK397, evidencia que el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, conductor del rodante de placas HGN819 se encuentra invadiendo su carril y en el que también transitaba a tractomula de placas XVI933.
2. Se genera la primer colisión entre el vehículo de placas HGN819 y el tractocamión de placas XVI933, en tanto el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ (conductor del carro de placas HGN819) que se dirigía hacia Santa Marta venía transitando por el carril que conduce hacia el lado contrario, es decir por la vía Santa

Marta – Barranquilla, este último carril era por donde conducía también el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ.

3. Luego de lo anterior, se genera una segunda colisión entre el vehículo de placas HGN819 y el tractocamión asegurado de placas ERK397, pues aquel estaba invadiendo el carril de este.
 4. Debido a esta segunda colisión en mención, el conductor del tractocamión asegurado pierde el control, pues cabe resaltar que dicho rodante de carga cuenta con unas dimensiones considerables, por lo que resulta complejo que ante la colisión generada por el vehículo de placas HGN819 no perdiera el control.
 5. Debido a la pérdida de control, se genera la colisión con el bus de placas WEL820. Debe mencionarse que tanto el señor ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS, conductor del bus, y el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, intentan realizar maniobras de reacción, pues por un lado el señor ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS intenta evadir el choque y por otra parte el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ intenta recuperar el control. No obstante, ante el tamaño de ambos vehículos es irresistible que no se produzca la colisión entre estos y como consecuencia de ello, las lesiones del hoy demandante, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.
 6. Conforme a la anterior explicación, es claro que el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ solo pudo recuperar el control luego de que se generó la colisión con el bus, por ello fue que la posición final del tractocamión asegurado corresponde a la berma de la vía que conduce a Barranquilla – Santa Marta.
 7. En todo caso, es latente que todo lo previamente dispuesto se originó por la conducta del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, conductor del carro de placas HGN819, quien invadió el carril contrario sin evidenciar que transitaban dos tractocamiones.
- Vehículo No. 4: Corresponde al tracto camión de placas XVI933 conducido por el señor CÉSAR ORLANDO RAMÍREZ CAUSIL.

Frente a la conducta de este tracto camión debe señalarse que no se cuenta con mayor registro, sin embargo, por las conductas del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, conductor del activo de placas HGN819, fue que se generó el primer choque, en donde estuvo involucrada la tractomula de placas XVI933, pues esta transitaba adelante del tractocamión asegurado de placas ERK397.

En ese sentido, cuando el conductor de la tractomula XVI933 chocó con el vehículo de placas HGN819, se dirigió hacia la berma derecha en el mismo sentido en el que transitaba (Santa Marta - Barranquilla), dejando la vía libre para que se generara la segunda colisión, es decir entre la tractomula asegurada y el carro de placas HGN819, para que finalmente el vehículo asegurado perdiera el control y colisionara con el bus de placas WEL820.

Todo lo anteriormente descrito concuerda con el relato de los hechos efectuado por los señores ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS, conductor del bus de placas WEL820 y JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, conductor del tracto camión asegurado de placas ERK397, veamos:

ENTREVISTA CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACA WEL 820.

El día 29 de agosto siendo las 02:50 pm con destino a Maicao desde la ciudad de origen B'quilla, me encontraba en caravana con otros vehículos, encabezaba una mula encarpada detrás de ella tres particulares, uno de ellos el que estaba detrás de la mula giró a la izquierda sin mirar si venía carro en sentido contrario, chocó de frente con una mula que venía en sentido contrario, la mula pierde el control, debido a que chocó con la parte del tren delantero dejándolo sin dirección y queriendo chocar de frente con el bus que conducía, logro esquivarlo golpeando fuertemente con el costado izquierdo.

Fue tan fuerte que abrió un gran hueco al bus, haciendo que el bus se volcara de forma aparatosa, quedo suspendido del cinturón y luego escucho gritos de pasajeros pidiendo ayuda. Un joven que pasaba en ese momento en una moto me ayuda a salir del cinturón caigo sin poder tener apoyo golpeándome el hombro izquierdo y parte del cuello. Por la adrenalina no hice caso y me dispuse ayudar a salir los pasajeros heridos, entre ellos tengo conocimiento de una persona fallecida, me entero días después.

Documento: Versión de ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS - Informe Técnico No. 22772 elaborado por la OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES S.A.S.

El día 27 de agosto cargo un viaje de jabón con destino a la ciudad de Barranquilla, inicio el día 28 mi camino a las 10 de la mañana, transcurriendo un día normal el 29 de agosto continuo mi camino paso el peaje de ciénaga en sentido hacia Barranquilla luego de andar más o menos 25 minutos alcanso una tractomula la cual iba a una velocidad moderada. Continuo detrás de él.

La tractomula de adelante ase el quite a la camioneta dejándome de frente a ella.

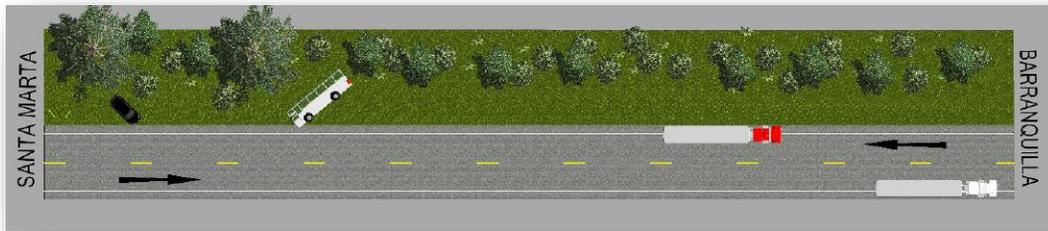
La camioneta colisiona con la mula de adelante luego contra mí. Pierdo el control de la mula y colisiono por un costado con el vehículo de pasajeros que se vio involucrado en el accidente.

Documento: Versión de JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ - Informe Técnico No. 22772 elaborado por la OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES S.A.S.

Conforme a lo anterior es claro que la única conducta que tuvo incidencia en el accidente de tránsito y las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, fue aquella desplegada por el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, conductor del vehículo de placas HGN819, lo cual también fue afirmado por medio del Informe Técnico, cuando se determina que:

“Así las cosas, es posible identificar que el VEHÍCULO No 01: Camioneta de placas HGN819, marca Dodge, Journey, modelo 2.13, color negro, conducida por el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 80.134.375. realiza una invasión del carril contrario” - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Dicha conclusión fue claramente ilustrada a través de la siguiente imagen:



Lo anteriormente mencionado también se puede visualizar con el vídeo que obra dentro del plenario en donde se aprecian los golpes y posiciones finales de los vehículos, veamos:





Como se ha desarrollado a lo largo del presente escrito, los puntos de impacto y la posición final de los vehículos concuerdan con la mecánica descrita del accidente. Lo que se traduce en que, el conductor del vehículo de placas ERK397, en atención a las normas de tránsito y al deber objetivo de cuidado, transitó de manera prudente por la vía en la cual ocurrió el accidente, sin que le resultara imputable algún tipo de responsabilidad por parte de la autoridad de tránsito o en procedimiento

contravencional. Lo que conllevó a que le resultara totalmente imprevisible que el conductor del vehículo de placas HGN819 desatendiera las normas de tránsito consagradas en el artículo 60 y ss., de la Ley 769 de 2002.

(iii) Emanada de un tercero totalmente ajeno

Como es evidente, la conducción del vehículo de placas HGN819 correspondía a un tercero que nada tenía que ver con el conductor del vehículo asegurado por ALLIANZ SEGUROS S.A. Por tanto, la omisión de emplear la debida prudencia y pericia en el ejercicio de la conducción es exclusivamente atribuible al señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ, quien tenía la obligación de emplear la debida diligencia y prudencia en el ejercicio de la conducción a fin de propender por su seguridad y la de los demás actores viales. En tal virtud, tal omisión es totalmente ajena a la esfera de manejo y control de los demandados.

En conclusión, de todo lo anteriormente explicado, es perfectamente lógico concluir que para el conductor del vehículo de placas ERK397, fue totalmente irresistible e imprevisible sortear la falta de prudencia y diligencia del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ como conductor del vehículo de placas HGN819, quien en ejercicio de una actividad peligrosa atendió a su imprudencia y negligencia al efectuar una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario. Por tanto, dado que operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho de un tercero” en cabeza del señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, se enervó la responsabilidad de los demandados y no podrán ser condenados a indemnizar a la parte demandante.

Por tanto, deberá el Honorable Juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

2. IMPOSIBILIDAD DE DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.

Para que se pudiera configurar la responsabilidad a cargo del extremo pasivo de la litis, resulta totalmente necesario que el extremo actor desde la presentación de la demanda probara el factor estructural de la responsabilidad, esto es, el nexo causal entre la supuesta acción desplegada por el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ en calidad de conductor del tracto camión de placas ERK397 y los perjuicios pretendidos por el hoy demandante. No obstante, como encontrará su Despacho en el análisis del plenario, en este proceso no existe ninguna prueba que demuestre que los perjuicios alegados son causalmente atribuibles al extremo pasivo, pues en el Informe Policial de Accidente de tránsito usado como prueba base de esta demanda, no se atribuyó ninguna codificación al vehículo de placas ERK397, sino que meramente se hizo una enunciación de una hipótesis sin mencionar a cuál de los cuatro vehículos involucrados en el accidente sería atribuible (que en todo caso corresponde al vehículo de placas HGN819). Razón suficiente para que su Despacho desde ya, advierta la imposibilidad de declarar la responsabilidad de los demandados, por falta de acreditación del nexo causal.

La teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

*“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. **La***

jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.”⁹ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(...) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”¹⁰

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la

⁹ Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008.

¹⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300.

naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos, (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal, y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño, únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para la configuración de la responsabilidad civil. En tal sentido, de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil que dispone que quién ha inferido daño a otros está obligado a la indemnización, en relación con tal precepto, cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado. Surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento y que en todo caso tiene como fin la reparación del daño inferido.

Dicho lo anterior, resulta evidente que en el presente caso no se encuentra acreditado un nexo

causal entre la conducta de los demandados y la consecuencia final, toda vez que como se explicó, en este proceso operó la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”. Dado que como se ha manifestado, la causa del accidente obedeció a la conducta imprudente del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ. En cualquier caso, dicho nexo causal que pretende hacer valer la parte demandante en este proceso no se encuentra acreditado mediante ninguna prueba documental y/o elemento de juicio que permita demostrar un verdadero nexo. Por el contrario, lo que se reflejó del análisis de las pruebas documentales, fue justamente que en este caso operó la causal eximentes de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”. Razón por la cual, al no encontrarse acreditado un nexo causal, no podría endilgársele al extremo pasivo ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad.

En conclusión, no hay prueba de la existencia del nexo causal entre el supuesto hecho generador del daño y el daño alegado. Pues como se ha analizado, en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”, como gestora de la causa del accidente, por cuanto el señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en las lesiones sufridas por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ. Lo anterior desvirtúa cualquier nexo causal que pretenda endilgar la parte actora. Por lo tanto, al no encontrarse acreditado el nexo causal, no podría endilgársele al extremo pasivo ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse demostrado uno de los elementos estructurales de la misma.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

3. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA ANULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA.

Se formula esta excepción teniendo en cuenta que ambos conductores se encontraban en el

ejercicio de una actividad peligrosa y, por tanto, la presunción sobre la culpa se neutraliza. Recordemos que, según lo narrado en la demanda, el 29 de agosto de 2022 el señor ÁLVARO SEPÚLVEDA BUELVAS – conforme se extrae del Informe Policial de Accidente de Tránsito – conducía el vehículo de placa WEL820 y se afirma que el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ conducía el vehículo de placas ERK397. Es por lo anterior que la parte actora tiene la carga de probar la culpa de la parte accionada, conforme lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al considerar que en el caso de las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren en el desarrollo o ejercicio de ellas, pues bajo ese entendido el problema se analizaría desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada y no a la luz del artículo 2356 del Código Civil.

En efecto, al adoptar la teoría de la neutralización, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que, en el caso las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren desplegando actividades peligrosas, pues aquí el problema se analiza desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada. Es decir, que no se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 2356 del Código Civil, que se fundamenta en la responsabilidad presunta. Lo anterior se materializa en la siguiente sentencia, en la que la Corte confirmó el fallo citando apartes de la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca:

*"Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, **se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 ibídem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual**"¹¹. – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

¹¹ Sentencia 5462 de 2000 M.P., José Fernando Ramírez Gómez.

En otra sentencia, la Corte Suprema de Justicia confirmó los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Armenia, aplicando el régimen de la culpa probada, por el hecho de tratarse de concurrencia de actividades peligrosas, así:

"La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y bicicleta que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 de Código Civil sino el 2341 de culpa probada"¹².

Bajo esta premisa, la propia jurisprudencia ha establecido que, al existir una concurrencia de actividades, corresponde al juzgador hacer un estudio de los elementos bajo los cuales ocurrió el accidente y los daños alegados, haciendo entonces necesario estudiar la incidencia de las partes en el acaecimiento del mismo conforme los elementos de prueba aportados en el proceso. Así lo precisó la Corte Suprema de Justicia:

*"Más exactamente, el fallador **apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro.***

¹² Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

Así las cosas, **la problemática de la concurrencia de actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de víctima y agente**, y en la secuencia causal de las mismas en la generación del daño, siendo esa la manera de ponderar el quantum indemnizatorio.” – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

E igualmente, como se menciona de la siguiente forma:

“La concurrencia de las dos actividades peligrosas en la producción del hecho dañoso y el perjuicio, en nada obsta para que la parte demandante, acudiendo a las reglas generales previstas en el artículo 2341 del Código Civil, pruebe la culpa del demandado, como aquí ocurrió.”

En el presente caso, la excepción se formula considerando que ambos conductores estaban en ejercicio de una actividad peligrosa, lo que neutraliza la presunción de culpa. Por ende, la carga de probar la responsabilidad recae en la parte demandante, la cual no ha sido acreditado hasta el momento. Según lo narrado en la demanda, el señor ALVARO SEPULVEDA BUELVAS era el conductor del bus de placas WEL820, mientras que el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ conducía el vehículo de placas ERK397 en la fecha del accidente.

Es pertinente recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en este caso donde ambas partes están en el ejercicio de actividades peligrosas, la presunción sobre la culpa se neutraliza. Por lo tanto, se debe analizar el caso desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, que se refiere a la culpa probada, en lugar del artículo 2356 del mismo código, que se basa en la responsabilidad presunta. Los documentos presentes en el expediente confirman que la actividad desplegada por los conductores en el momento del accidente era la de conducción de los dos vehículos, por lo que se clasifican ambas, indudablemente, en el marco de las actividades peligrosas, lo que significa que la presunción sobre la culpa se anula. En consecuencia, la parte

actora tiene la carga de demostrar la culpa, como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

En conclusión, al existir una concurrencia de actividades peligrosas, corresponde al juzgador examinar detalladamente los elementos que llevaron al accidente y los daños reclamados. Esto implica considerar el marco de circunstancias en que ocurrió el suceso, la naturaleza y magnitud del riesgo, así como la incidencia causal de las conductas de los involucrados en la generación del daño. Por lo tanto, la concurrencia de actividades peligrosas obliga la parte demandante pruebe la culpa del demandado, como lo establecen las reglas generales del artículo 2341 del Código Civil; situación que no se ha acreditado en el plenario.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

4. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE.

En el proceso de la referencia no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, por cuanto los demandados no son responsables de las lesiones del señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ. Sin embargo, sin que ello constituya reconocimiento alguno de responsabilidad, debe decirse que el pago realizado por la calificación de pérdida de capacidad laboral no es un gasto que se haya originado por los hechos acaecidos el 29 de agosto de 2022 y el soporte que allega el demandante no cumple con los requisitos legales. Asimismo, debe indicarse que, si el Despacho considera que dicho emolumento es procedente, deberá ser reconocida en la eventual condena de agencias en derecho, por cuanto podría ser un gasto derivado del proceso judicial. En ese sentido, la suma solicitada no puede ser reconocida, incluso, en el remoto evento en que se llegase a demostrar la presunta responsabilidad endilgada al extremo pasivo.

El daño emergente ha sido desarrollado jurisprudencialmente como la tipología de perjuicios que

comprende la pérdida de elementos patrimoniales como consecuencia de los hechos dañosos, sin embargo, ha establecido ampliamente que para la procedencia del reconocimiento de los mismos resulta totalmente necesario acreditarlos dentro del proceso, carga que le asiste al reclamante de los perjuicios. Bajo estos derroteros, en el caso particular es completamente improcedente reconocimiento alguno a título de daño emergente, por cuanto no existe prueba cierta, clara y suficiente que acredite las sumas solicitadas por el extremo actor, pues como se ha mencionado, la calificación de la pérdida de capacidad laboral no es un gasto derivado del accidente de tránsito. Es claro que la parte Demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. A efectos de entender la tipología de dichos perjuicios, vale la pena recordar lo indicado por la honorable Corte Suprema de Justicia con respecto a la definición del daño emergente en los siguientes términos:

“De manera, que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado; en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento.”¹³

Con fundamento de lo anterior, podemos concluir que el daño emergente comprende la pérdida de elementos patrimoniales, causada por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Ahora bien, la parte Demandante manifiesta que se generó una erogación de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$600.000) por la elaboración del dictamen de pérdida de

¹³ Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 07 de diciembre de 2017. M.P. Margarita Cabello Blanco. SC20448-2017

capacidad laboral. Sin embargo, dicho concepto no puede ser procedente, debido a que no es un gasto que se derive del accidente de tránsito del 29 de agosto de 2022, por lo que no hay prueba si quiere sumaria de la existencia del daño emergente en las sumas que alegan, por el contrario, lo que se evidencia es que el extremo actor fundamenta su petición en una mera aseveración sin fundamento probatorio alguno.

Es claro que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, para la procedencia de reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, es necesario que el reclamante demuestre mediante prueba suficiente que se trata de perjuicios ciertos y no hipotéticos. Lo que no sucede en el caso de marras, en tanto que la parte demandante solicita reconocimiento de sendas sumas a título de daño emergente, sin que prueben si quiera sumariamente la causación de dichos perjuicios, carga que les asiste por ser los reclamantes del daño, según los términos jurisprudenciales de la Corte. Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(...) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; **[pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción** (...)”¹⁴ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

Así las cosas, en relación a la carga probatoria que recae en este caso en la parte demandante, se puede observar que en el expediente no obra prueba alguna que acredite las erogaciones estimadas en SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$600.000) en las que supuestamente incurrió la parte demandante con ocasión al accidente de tránsito. En efecto, la consecuencia jurídica a la falta al deber probatorio en cabeza del actor es sin lugar a dudas la negación de la pretensión.

¹⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. MP Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en consideración que el documento que se aporta junto con la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario para que sea considerada factura:

“Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

- a. Estar denominada expresamente como factura de venta.*
 - b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.*
 - c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.*
 - d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.*
 - e. Fecha de su expedición.*
 - f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.*
 - g. Valor total de la operación.*
 - h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.**
 - i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.*
- (...) - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Así las cosas, es evidente que el documento que se remite por la parte activa no cumple con el requisito contemplado en el literal h de la norma previamente citada, en virtud de que, no tiene el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, por ello al no cumplir con el requisito en mención, es inviable que este honorable despacho acredite con este el perjuicio material alegado por la parte actora.

En conclusión, una vez revisadas las pruebas obrantes en el plenario del proceso, no cabe duda de

que no existe ninguna prueba que acredite la causación de daño emergente, pues la factura de venta no cumple con los requisitos del Estatuto Tributario, así como tampoco puede indicarse que este se derivó del accidente de tránsito, razón suficiente para que no se le reconozca ninguna suma indemnizatoria por esta tipología de perjuicios, en tanto que no se encuentra probado. Máxime cuando la Corte Suprema de Justicia fue totalmente clara en indicar que éstos no se presumen, sino que se deben probar.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción

5. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y FALTA DE PRUEBA DEL LUCRO CESANTE

Para empezar, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica, de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar. Sin embargo, para el caso en concreto, dentro del plenario no se corroboran los ingresos del señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ y que en efecto estos hayan disminuido con ocasión al accidente de tránsito. De hecho, se evidencia que, para el 29 de agosto de 2022, la víctima ya contaba con más de 70 años, por lo que no era una persona activa dentro del mercado laboral y por otra parte, ya contaba con una pensión de invalidez.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia

ha sostenido lo siguiente:

“(…) en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (…) Vale decir que el 3 cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (…)

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que **conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.**”¹⁵ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse, y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual.

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos

¹⁵ Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008.

del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

“La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (...)

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben

reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.¹⁶ -

(Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva, no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica. Lo anterior, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte Demandante, toda vez que no se tiene certeza de la forma en la que fueron calculados los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda, ni el valor de los presuntos ingresos del demandante para basar el cálculo, así como tampoco existe prueba en el plenario que acredite cuáles eran los ingresos que el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ percibía. Maxime cuando para la fecha del accidente de tránsito del 29 de agosto de 2022, la víctima tenía más de 70 años y contaba con pensión de invalidez conforme al registro en el Registro Único de Afiliados - RUAF.

PENSIONADOS							Fecha de Corte:	2024-09-20
Entidad Pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de Pensión	Estado	Tipo de Pensionado	Fecha Resolución	Número Resolución Pension PG		
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	INVALIDEZ POR RIESGO COMUN	Activo	Régimen de prima media con tope máximo de pensión	1990-01-01	123		

De tal suerte, que en el caso sub judice no puede presumirse el lucro cesante a favor del demandante como consecuencia de la supuesta responsabilidad civil extracontractual, así como

¹⁶ Consejo de Estado. Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019. Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia.

tampoco existe prueba de la actividad económica desempeñada por el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ para el momento del accidente. Maxime cuando es posible corroborar que se encontraba pensionado por invalidez desde el año 1990.

Confirmando lo anteriormente dicho, La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 20 de noviembre de 1943 revocó una condena al pago de perjuicios materiales que se había impuesto en primera instancia, soportada en los siguientes fundamentos:

“El daño futuro es indemnizable a condición de que en el momento presente resulte cierto que se realizará. Es inadmisibles conceder reparación por pérdidas puramente futuras. Cualquiera base que se fije será necesariamente producción de la fantasía. Que el sujeto lesionado hará en el futuro esto o aquello, que obtendrá ganancias en actividades y en formas determinadas, es una incógnita que nadie tiene el poder de adivinar. De consiguiente para que el perjuicio futuro sea evaluable requiere que aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual susceptible de estimación inmediata.”¹⁷

Lo anterior significa que el lucro cesante no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias. Por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso. De manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso. Siempre que logre acreditarse que en efecto la víctima, al momento de la ocurrencia del daño, ejerciera alguna actividad productiva que le generara los ingresos dejados de percibir.

Así pues, no resulta procedente la pretensión impetrada según la cual debe reconocerse y pagarse en favor del demandante sumas de dinero por concepto de lucro cesante consolidado y futuro. Toda

¹⁷ Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de noviembre de 1943.

vez que no hay prueba dentro del expediente de la actividad productiva alguna que le generara ingresos a la víctima. Maxime cuando existe un registro de su pensión de invalidez de origen común en el año 1990, en ese sentido, primero es improcedente es reconocimiento del perjuicio en tanto el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ no sufrió ninguna disminución en los posibles ingresos, sin que claramente estos hayan sido acreditados; y en segundo lugar, es inútil el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado, pues este indica que existe una disminución del 30.93%, sin embargo, en el Registro Único de Afiliados - RUAF existe un antecedente de pensión de invalidez desde el año 1990, es decir que, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ tuvo que haber sido calificado con un porcentaje igual o superior al 50%.

En ese sentido el dictamen aportado y elaborado por el Dr. LUIS EDUARDO SAAVEDRA no genera certeza sobre el presupuesto a acreditar y por el contrario es cuestionable la realización del mismo, pues en este ni si quiera tuvo en cuenta los dictámenes previos, como se visualiza a continuación:

5. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN		
5.1 RELACIÓN DE DOCUMENTOS		
DOCUMENTO	SE TUVO EN CUENTA	
Historia Clínica	X	
Epicrisis o Resumen de Historia Clínica	X	
Exámenes Paraclínicos	X	
Dictámenes y otros		

5.2 DIAGNÓSTICO MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN		
No.	DIAGNÓSTICO	CODIGO CIE-10

En consecuencia, este Despacho debe tener en consideración que el dictamen de pérdida de capacidad laboral es cuestionable, en la medida que no tuvo en cuenta los anteriores dictámenes a través de los cuales se calificó al demandante conforme la pensión de invalidez reconocida; y, en igual forma, debido a que precisamente porque cuenta con esta pensión es evidente que el demandante tuvo que haber sido calificado previamente con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Por lo que es claro que dentro de la experticia que se aporta no se tuvieron en cuenta las razones por las cuales se adjudicó dicho porcentaje en el momento que el demandante

fue calificado para obtener la pensión de invalidez, por ello esta prueba es inútil, en la medida que no brinda certeza sobre el supuesto de hecho.

En conclusión, al no existir prueba si quiera sumaria de los elementos estructurales del lucro cesante, por cuanto en primer lugar, no acredita sus ingresos y la disminución de estos por el accidente de tránsito. En segundo lugar, el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ para la fecha del accidente de tránsito contaba con más de 70 años, por lo que no era una persona activa laboralmente. En tercer lugar, la única prueba que aporta con la cual pretende le sea reconocido el lucro cesante es impertinente por cuanto en esta claramente no se evidencia disminución en sus ingresos e inútil, puesto que no genera la certeza sobre el supuesto de hecho que pretende acreditar, ya que dicho Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral no tuvo en cuenta factores previos del demandante. En cuarto lugar, toda vez que se registra una pensión de invalidez desde el año 1990, dicha prestación no ha sido menguada por el accidente de tránsito objeto de litigio. Por lo anterior, resulta incuestionable que el Honorable Juez no se encuentra jurídicamente habilitado para reconocer ningún emolumento a título de lucro cesante en este caso.

Por todo lo anterior, ruego al señor juez tener como probada esta excepción.

6. TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO MORAL

En el proceso de la referencia no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de daño moral, por cuanto no se acreditó la responsabilidad del señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ, conductor del vehículo asegurado, en la causación del accidente de tránsito. Sin embargo, sin que ello constituya reconocimiento alguno de responsabilidad por parte de la demandada, debe decirse que la tasación del daño moral efectuada por el extremo actor en las pretensiones de la demanda, es a todas luces exorbitante y carece de cualquier sustento normativo y/o jurisprudencial. En ese sentido, es claro que la parte demandante está efectuando una petición que excede con creces los

baremos máximos establecido por la jurisprudencia¹⁸, razón por la cual, la suma solicitada no puede ser reconocida, incluso, en el remoto evento en que se llegase a demostrar la presunta responsabilidad endilgada al extremo pasivo.

Ahora bien, pese a la evidente falta técnica en la solicitud de este perjuicio, debe ponerse de presente que cualquier reconocimiento por este concepto resulta improcedente. En principio, los perjuicios extrapatrimoniales por concepto de daño moral que pretende el demandante resultan a todas luces improcedentes. Lo anterior, bajo el entendido de que la indemnización del daño moral solo procede cuando existe responsabilidad del demandado y como quiera que en este caso no existe tal responsabilidad, claramente no hay lugar a su reconocimiento. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que de todas maneras la tasación propuesta para los perjuicios morales es exorbitante y en tal virtud, no puede ser tenida en cuenta por el Despacho.

Siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 23/05/2018, MP: Aroldo Wilson Quiroz, Rad: 11001-31-03-028-2003-00833-0, en donde se estableció que se reconocerá una suma por concepto de daño moral una suma máxima de \$60.000.000 cuando nos encontramos ante daños permanentes, tal y como se transcribe a continuación:

“En todo caso, conviene tener a la vista que esta Corporación, para eventos de daños permanentes con comprobada trascendencia en la vida de los afectados, ha accedido a reparaciones morales de \$50.000.000 (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.º 2000-00196-01) y \$60.000.000 (SC9193, 28 jun. 2017, rad. n.º 2011-00108-01), equivalentes a 72,5 y 81,3 salarios mínimos vigentes para la fecha de las condenas, respectivamente, razón por la que 20 smlmv no se advierte como una indemnización desatinada en un caso con consecuencias temporales”

¹⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia del 07 de marzo de 2019. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte actora, debido a que son exorbitantes. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En conclusión, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por el actor, y en tal sentido no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Puesto que esta Corporación ha determinado que ante las lesiones permanentes se reconocerá la suma de \$60.000.000. Ahora bien, en el presente asunto, el extremo actor pretende un valor superior, por lo que solicito al Despacho no reconocer más del valor máximo fijado por la Corte Suprema de Justicia, más cuando no hay prueba siquiera sumaria de la responsabilidad civil extracontractual que pretende endilgar a la parte pasiva de la litis.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

7. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

Los perjuicios extrapatrimoniales por concepto de daño a la vida en relación que pretende el extremo demandante resultan a todas luces improcedentes. Lo anterior, bajo el entendido de que la indemnización del daño moral solo procede cuando existe responsabilidad del demandado y como quiera que en este caso no existe tal responsabilidad, claramente no hay lugar a su reconocimiento. Como se ha señalado en líneas precedentes, para el caso en marras no existe prueba del nexo causal entre la conducta del conductor del vehículo asegurado y el daño deprecado por el demandante, conforme con lo consignado en el Informe Policial de Accidente de Tránsito en el que se observa una hipótesis genérica no atribuida a ninguno de los conductores (y que en todo caso corresponde al vehículo de placas HGN819). Adicionalmente, no puede pasarse por alto que de todas maneras la tasación propuesta para los perjuicios de daño a la vida en relación es exorbitante

y en tal virtud, no puede ser tenida en cuenta por el Despacho.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que en el evento en el que se considere que los perjuicios solicitados corresponden al daño a la vida en relación de cualquier manera deberá tenerse en cuenta que la tasación propuesta por la parte Demandante es absolutamente exorbitante en tanto supera los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia:

*“Tasación del daño a la vida de relación **para la víctima directa (menor de edad) en veinte millones de pesos (\$20.000.000),** por la perturbación psíquica, deformidad física permanente **y pérdida de su capacidad laboral en un 20.65%**, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía. Responsabilidad extracontractual del propietario del vehículo causante del accidente, la Cooperativa de Transportadores afiliadora del taxi y las aseguradoras que expidieron pólizas amparando al dueño.”¹⁹ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

Es por ello que se evidencia una desmesurada solicitud perjuicios por concepto de daño a la vida en relación por el valor pretendido por el demandante. En efecto, es evidente el ánimo especulativo y la errónea tasación del daño a la vida en relación, en tanto el mismo resulta exorbitante. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva de los supuestos daños a la vida de relación que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia ya relacionada. Así las cosas, teniendo en cuenta que el precedente jurisprudencial reseñado contempló como indemnización la suma de \$20.000.000 para el caso de un menor de edad cuya pérdida de capacidad laboral era del 20.65%, para el caso de marras no podrá reconocerse el monto de \$52.000.000 solicitado por el demandante, pues primero, el dictamen de pérdida de capacidad laboral presenta múltiples inconsistencias, por lo que no podrá

¹⁹ Sentencia de la Corte Suprema SC5885-2016 de Justicia del 6 de mayo de 2016 MP. Luis Armando Tolosa.

tenerse en consideración y en segundo lugar, es exorbitante en comparación con el caso citado.

En conclusión, este perjuicio de daño a la vida en relación no es procedente, ya que no se reúnen los requisitos que los haga merecedores de recibir esa indemnización, pues aparte de no existir responsabilidad de los demandados. Dicho en otras palabras, para el caso en particular, resulta improcedente el reconocimiento de este tipo de perjuicio a favor de los demandantes, no solo porque NO se ha encontrado probada la responsabilidad, sino porque es exorbitante la suma pretendida por el actor.

8. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de las entidades demandadas y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria, ello en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

EXCEPCIONES DE FONDO RELATIVAS AL CONTRATO DE SEGURO

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE ALLIANZ SEGUROS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Es necesario tener en consideración que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional

de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto no se acreditó el nexo causal entre los daños alegados y la conducta desplegada por el señor JOHN JAIRO NOVOA JIMÉNEZ en calidad de conductor del vehículo de placas ERK397, quien conforme con el Informe de Policía de Accidente Tránsito y Dictamen Pericial en ningún momento vulneró las normas de transporte. Adicionalmente, debido a que no se acreditó, ni soportó la cuantía de la pérdida, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de mi representada.

En este punto, debe decirse que la Póliza No. 023128783 / 35 no podrá verse afectada en el presente asunto, por cuanto la parte demandante incumplió las cargas contenidas en el artículo 1077 del Código de Comercio, en tanto no demostró la realización del riesgo asegurado ni la cuantía de la pérdida. Para efectos de las reclamaciones por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre el extremo actor, quienes en la relación contractual tienen la calidad de beneficiarios. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio establece:

“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. (...) - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro. Tal como lo ha indicado doctrina sobre el tema:

“Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio

califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado.

Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)

“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)*

“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)²⁰ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

²⁰ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil,

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que éste. Pues en caso contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (...), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en

Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.)²¹.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido la importancia de la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida, veamos:

*“(…) Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. **Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios**²²” - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

De lo anterior, se infiere que en todo tipo de seguros cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se ha probado el siniestro ni su cuantía y en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del

²¹ Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.º 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

²² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501.

asegurador.

(i) La no realización del riesgo asegurado

Sin perjuicio de las excepciones expuesta en capítulo precedente, se formula esta, de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante las pólizas en virtud de las cuales se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceras personas en exceso de los valores asegurados por el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y los pagos hechos por el Sistema de Seguridad Social, Planes Voluntarios de Salud o cualquier póliza contratada por la víctima para el reconocimiento de sus perjuicios personales. No obstante, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues no existió nexo causal entre la conducta del conductor del vehículo y la ocurrencia del accidente, por el contrario, se observa la falta de acreditación del nexo causal entre las conductas del asegurado y el daño deprecado por el demandante, pues es clara la configuración de la causal exonerativa de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”.

En ese sentido, virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad extracontractual en que incurra el asegurado. Sin embargo, la demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de las demandadas y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal, pues no se ha demostrado

que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la aseguradora.

(i) Acreditación de la cuantía de la pérdida

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior, puesto que el demandante solicita el reconocimiento por concepto de daño moral, daño a la vida en relación, daño emergente y lucro cesante. Sin embargo, su tasación es excesiva y sin fundamentos, puesto que no obra prueba que corrobore los ingresos disminuidos, adicionalmente, el Dictamen que obra dentro del plenario contienen múltiples inconsistencias. Por lo anterior no podrá reconocerse emolumento alguno con cargo a la póliza de seguro.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Al contrario, se observa que lo que operó en el presente caso fue justamente una causal eximente de la responsabilidad, esto es, el “hecho de un tercero”, conforme con la documental arrojada al expediente.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

**2. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO AUTO
COLECTIVO PESADOS No. 023128783 / 35**

En materia de seguros, el asegurador según el Artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan

o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (arts. 1056 y 1127 del C. de Co.), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la Póliza No. 023128783 / 35 en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, que de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador. Por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la Póliza No. 023128783/35, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

3. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO EN LA QUE SE IDENTIFICA LA PÓLIZA, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del Código de Comercio,

ALLIANZ SEGUROS S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas. Por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de la Demandante contra mi representada Allianz Seguros, tal responsabilidad deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado Póliza No. 023128783 / 35, con vigencia desde el 01 de agosto de 2022 y el día 31 de julio de 2023, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y las condiciones generales de la misma.

Por lo expuesto, solicito comedidamente al despacho declarar la prosperidad de la presente excepción.

4. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo, de modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición,

corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de resolución o pago inmediato.”²³

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro, tiene un carácter meramente indemnizatorio, y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello, que aterrizando al caso en cuestión no es de recibo indemnizar el daño tal y como fue pretendido por la parte Demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este deberá ser objeto de un acuerdo expreso” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños, y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Asegurado y

²³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

No puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Así las cosas, de efectuar cualquier pago por concepto de daño moral, daño a la vida en relación, daño emergente y lucro cesante, emolumentos que no se encuentran debidamente justificados en virtud de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia para este tipo de perjuicios, por tanto, reconocerlos implicaría un enriquecimiento para la parte demandante y en esa medida se violaría el principio indemnizatorio del seguro. En otras palabras, si se reconocieran los daños pretendidos se transgrediría el principio indemnizatorio del seguro toda vez que se estaría enriqueciendo al extremo actor en lugar de repararlo. Lo anterior como quiera que:

En primera medida, el daño a la vida en relación se estimó en un valor mayor al que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido para casos similares, así también el daño emergente no puede ser reconocido en atención a que el mismo no es un daño que se derive del accidente de tránsito, finalmente el lucro cesante es improcedente por cuanto no es cierto, en virtud de que no está corroborado la disminución del ingreso, así como el dictamen de PCL es controversial por cuanto no tuvo en cuenta antecedentes o elementos previos del demandante. De manera que no puede ser reconocida a la parte demandante tal como se pretende en el líbello petitorio.

En conclusión, teniendo en cuenta que la parte demandante no acreditó, a través de elementos probatorios útiles, necesarios y pertinentes la cuantía y la existencia de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos, solicito al Honorable Despacho no reconocer su pago, toda vez que con su reconocimiento se vulneraría el carácter indemnizatorio del contrato de seguro. Dicho de otro modo, la correcta valoración del daño persigue una efectiva reparación frente al daño que se alega, por eso una inadecuada valoración de los perjuicios se constituye en fuente de enriquecimiento, poniendo en entredicho la reparación misma de los perjuicios y el carácter

indemnizatorio del contrato de seguro.

5. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de ALLIANZ SEGUROS S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores y de igual forma, se deberá tener en cuenta el deducible pactado en el contrato. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”²⁴ (Subrayado y negrilla fuera de texto original)*

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:

²⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

Coberturas		
Amparos	Valor Asegurado	Deducible
Responsabilidad Civil Extracontractual	4.000.000.000,00	1.800.000,00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal y Civil	25.000.000,00	0,00
Pérdida Parcial por Daños de Mayor Cuantía	429.900.000,00	0,00
Pérdida Parcial por Daños de Menor Cuantía	429.900.000,00	4.300.000,00
Pérdida parcial por Hurto de Mayor Cuantía	429.900.000,00	0,00
Pérdida Parcial por Hurto de Menor Cuantía	429.900.000,00	4.300.000,00
Temblor, Terremoto, Erupción Volcánica	429.900.000,00	1.000.000,00
Asistencia	Incluida	0,00
Gastos de Movilización Pérd. Mayor Cuantía	3.000.000,00	0,00

En este punto es preciso resaltar que el valor asegurado en la póliza se aplica de conformidad con lo señalado en el condicionado particular de la póliza en el que se indica que el límite para el valor asegurado.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis ALLIANZ SEGUROS S.A. no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la Póliza, a la luz del clausulado de la misma. Pues, en todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

6. LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR EN LO ATINENTE AL DEDUCIBLE PACTADO

Subsidiariamente a los argumentos precedentes, sin perjuicio de los fundamentos expuestos a lo largo del escrito y sin que esta mención constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada. En el improbable evento en el que el honorable Despacho considere que la Aseguradora sí tiene la obligación de pagar indemnización alguna, resulta fundamental que tenga en cuenta el siguiente deducible pactado en los contratos de seguro:

Coberturas		
Amparos	Valor Asegurado	Deducible
Responsabilidad Civil Extracontractual	4.000.000.000,00	1.800.000,00

En este orden de ideas, resulta de suma importancia que el Honorable Juzgador tome en consideración que, tanto la definición del deducible como su forma de aplicación, ha sido ampliamente desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia en distintos conceptos, como el que se expone a continuación:

“Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

En este orden de ideas, correspondería a las partes en el contrato de seguro determinar el porcentaje de la pérdida que sería asumido por el asegurado a título de deducible, condición que se enmarcaría dentro de las señaladas por el numeral 11 del artículo 1047 del Código de Comercio al referirse a “Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes”²⁵. - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

²⁵ Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2016118318-001 del 29 de noviembre de 2016. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, DEDUCIBLE.

De esta manera, en el hipotético evento en el que mi representada sea declarada responsable en virtud de la aplicación de los contratos de seguro. Es de suma importancia que el Honorable Juzgador descuenta del importe de la indemnización la suma pactada como deducible que, como se explicó, corresponde a la suma de \$1.800.000.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

7. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

8. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO.

Sin perjuicio de las excepciones formuladas anteriormente, es importante tener en cuenta que el Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece provisiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Se destaca entonces el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria. Pues en tanto la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no se efectúa esa distinción. Sobre este particular, y en especial, para establecer la diferencia entre los dos tipos de prescripciones derivadas del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil manifestó lo siguiente:

“(…) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada –en general-, prohibió para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria

(…)

La primera, según se acotó en líneas anteriores, de stirpe subjetiva, y la segunda, de naturaleza típicamente objetiva, calidades estas que se reflejan, de una parte, en los destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas –excluidos los incapaces- y “toda clase de personas” –incluidos estos-, respectivamente, y,

de la otra, en el venero prescriptivo.

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, (...)), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que, expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento.²⁶ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse en el transcurso del proceso que la demanda se interpuso en un tiempo mayor a los dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho que da base a la acción, no existiría duda alguna que ha operado el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro que se encuentran en cabeza de la parte actora en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

9. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO CON ALLIANZ SEGUROS S.A.

En el caso que se encuentra bajo estudio, no es viable que se declare como responsable a la Compañía de Seguros en virtud de la figura de la solidaridad, pues no existe convención, testamento ni ley en donde se haya dejado establecida la solidaridad civil entre el asegurado, tomador del Seguro y mi representada. Por lo anterior, es improcedente una condena en contra de mi prohijada, pues la figura jurídica en mención no ha sido pactada por las partes dentro del contrato de seguros.

²⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 2002. MP: Dr. Nicolás Bechara Simancas.

El artículo 1568 del Código Civil Colombiano establece:

“ARTICULO 1568. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.”

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la Corte²⁷ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. **Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable;** y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario.”*

– (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

²⁷ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, entre mi procurada y el tomador no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito acaecido el 29 de agosto de 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar el caso concreto resulta claro que ni en una convención, ni en un testamento, ni en la ley, se estableció la solidaridad civil respecto de la empresa tomadora de la póliza y ALLIANZ SEGUROS S.A., figura que tampoco se pactó dentro del contrato de seguro celebrado por estas.

Por lo tanto, a esta Compañía Aseguradora que represento no le es aplicable ningún tipo de solidaridad. Así las cosas, en caso de una eventual sentencia en contra de los intereses de Allianz Seguros SA, solicito al despacho lo dispuesto en el artículo 1079 del Código de Comercio, que establece *“El asegurador no estará dispuesto a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1044”*.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

10. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley o en el Contrato con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y prescripción contemplada en el artículo 1081 del C.Co, y cualquier otra causal que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de las entidades demandadas

y se la exima de toda obligación indemnizatoria, ello en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso.

CAPITULO II
CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR INVERSIONES
CADAL S.A.S.

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

AL HECHO 1: Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con los documentos que obran en el expediente.

AL HECHO 2: Es cierto que, para la fecha en la que se narran los hechos, el vehículo de placas ERK397 se encontraba asegurado mediante la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35. No obstante, desde este momento el Despacho deberá tener en cuenta que esta no podrá ser afectada por los hechos que se debaten en este litigio, por cuanto, para que opere la obligación indemnizatoria de ALLIANZ SEGUROS S.A., es totalmente necesario que se acredite la realización del riesgo asegurado en la Póliza, circunstancia que en este caso no ha sucedido de acuerdo con lo dispuesto en la contestación de la demanda.

AL HECHO 3: Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con los documentos que obran en el expediente.

AL HECHO 4: Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con los documentos que obran en el expediente.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: Respecto a esta numeral, es de indicar que no se trata propiamente de una pretensión frente al cual se pueda manifestar alguna posición, sino que por el contrario se trata de una consecuencia procesal del artículo 64 del Código General del Proceso. Ahora bien, si con la admisión del llamamiento en garantía a mi procurada, se pretende que la misma indemnice a la parte activa dentro del presente litigio, ante una eventual condena en contra de los demandados, lo cierto es que aunque se admita el llamamiento, las pruebas obrantes en el plenario demuestran una ruptura del nexo causal que no permite la imputación de responsabilidad a los demandados y como consecuencia, no podrá entenderse realizado el riesgo asegurado ni declararse el siniestro. Por ello la Póliza no puede ser afectada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: En efecto, ME OPONGO a la pretensión elevada por la llamante en garantía debido a que la misma no tiene vocación de prosperidad, por cuanto según las pruebas aportadas al proceso no se dejó acreditado el nexo causal, pues no se ha demostrado que el accidente de tránsito en razón del cual se produjeron lesiones al demandante haya ocurrido como consecuencia de las conductas desplegadas por el conductor del vehículo asegurado. Siendo así, no procede reclamación alguna con cargo a la Póliza de seguro, puesto que no se han reunido los elementos esenciales para que sea procedente declarar la responsabilidad civil extracontractual y como consecuencia, no puede entenderse realizado el riesgo asegurado.

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. NO EXISTE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE ALLIANZ SEGUROS S.A., TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO.

No existe obligación indemnizatoria a cargo de la Compañía Aseguradora respecto de la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado y amparado en el contrato de seguro, esto es, la realización del hecho dañoso acaecido durante la vigencia de la póliza, es decir, entre el 01 de agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023,

así como que el mismo se derive de una responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado. Como aquello no ocurrió en virtud de la clara inexistencia de elementos de prueba que permitan acreditar los elementos estructurales de la responsabilidad que se persigue y además porque las únicas pruebas que obran en el plenario dan cuenta del “hecho de un tercero” como eximente de responsabilidad, lo cierto es que en este caso no puede entenderse que ha nacido la obligación del asegurador.

Lo anterior se afina en las expresas condiciones generales y particulares de la Póliza que sirvió de base para el llamamiento en garantía en contra de mi representada, contrato asegurativo que contempla específicamente el riesgo asegurado, como se muestra a continuación:

6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza.

Ahora bien, lo anterior debe entenderse de conformidad con lo reseñado en el artículo 1072 del Código de Comercio que define el siniestro como “*la realización del riesgo asegurado*”. Esto implica que si el riesgo asegurado no se realiza no existirá ni la más mínima posibilidad de predicar la existencia de la obligación condicional del asegurador.

Así las cosas, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional en cabeza de mi mandante, teniendo en cuenta que el accidente fue producto de una causal extraña exonerativa de responsabilidad como lo es el “hecho de un tercero”. Para el caso que nos ocupa, es totalmente claro que la conducta del señor DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ fue el único factor relevante y adecuado que incidió en el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ. Por tal razón, resulta jurídicamente inviable imputarle responsabilidad

a los demandados, tal como se expuso en la excepción de mérito propuesta en la contestación de la demanda. Por todo lo anterior, no estando demostrados los elementos de la responsabilidad por parte de los demandados, no podrá en ninguna circunstancia afectarse la Póliza en cuestión y surgir obligación alguna a cargo de mi prohijada. Dicho de otra manera, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado, no se cumplió con la condición suspensiva necesaria para que surgiera la obligación indemnizatoria en cabeza de ALLIANZ SEGUROS S.A.

En conclusión, debido a que no existe responsabilidad en cabeza del extremo pasivo, no ha surgido la obligación condicional del asegurador, pues en la medida que no se ha realizado el riesgo asegurado no puede declararse la existencia del siniestro y como consecuencia la Póliza no puede afectarse. Por todo lo anterior, no demostrada la supuesta responsabilidad en cabeza de los demandados, no podrá en ninguna circunstancia afectarse la Póliza No. 023128783 / 35.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

2. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO AUTO COLECTIVO PESADOS No. 023128783 / 35.

Sin perjuicio de las excepciones precedentes, se plantea que dentro de las condiciones particulares de la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35 suscrita entre mi representada y ECOMMERCE LOGISTIC S.A.S., donde figura como asegurado INVERSIONES CADAL S.A.S., se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional y la delimitación de la extensión del riesgo asumido por ALLIANZ SEGUROS S.A. En efecto, en ella se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo. De tal manera que, si en el proceso se llegara a probar los supuestos facticos que configuran una causal de exclusión de cobertura, el Despacho no podría imponer a cargo de mi mandante ningún tipo de obligación.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“En efecto, no en vano los artículos 1056²⁸ y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.

*Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos”.*²⁹

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros. **Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo**, mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende*

²⁸ Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

²⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Ternera Barrios.

*todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego, **en este último negocio asegurativo, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes**³⁰ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto).*

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

*“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, **en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado preestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador.***

Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado»³¹ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

³⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2000-5492-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

³¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta.

Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la Póliza No. 023128783 / 35 en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, que de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador. Por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la Póliza No. 023128783/35, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

3. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS.

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del Código de Comercio, ALLIANZ SEGUROS S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas, por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra los demandados, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, con vigencia desde el 01/08/2022 - 00:00 horas hasta el 31/07/2023 - 24:00 horas.

4. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido ni a los perjuicios plenamente acreditados. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”³²

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello por lo que, aterrizando al caso en cuestión, no es de recibo indemnizar el daño tal y como fue pretendido por la parte demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

³² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento.

La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento.

Debe recordarse que tal como se expuso en el capítulo de contestación de la demanda, y sin que signifique aceptación de responsabilidad alguna, los perjuicios alegados por el extremo actor por concepto de daño emergente no fueron soportados, por el contrario, lo que se evidencia es que el extremo actor basa su petición en una mera aseveración sin fundamento probatorio alguno. Asimismo, debe tenerse en consideración que el documento que se aporta junto con la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario para que sea considerada factura, específicamente en lo concerniente a no contar con **“h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura”**, y al no cumplirse con el requisito en mención, es inviable que este Despacho acredite con tal documento el perjuicio material alegado por la parte actora.

Por otra parte, en lo referente al lucro cesante que aduce haber sufrido la demandante, es improcedente el reconocimiento de dicho concepto, en tanto que, (i) el demandante no acredita sus ingresos, ni mucho menos la disminución de estos como consecuencia del accidente de tránsito, (ii) el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ para la fecha del accidente de tránsito contaba con más de 70 años, por lo que no era una persona activa laboralmente, (iii) la única prueba que

aporta con la cual pretende le sea reconocido el lucro cesante es el dictamen de pérdida de capacidad labora, el cual es impertinente, por cuanto en este claramente no se evidencia la disminución en sus ingresos; inútil, puesto que no genera la certeza sobre el supuesto de hecho que pretende acreditar, ya que dentro de dicha experticia no se tuvo en cuenta factores previos del demandante; e, inconducente, si se toma en consideración que dicho “dictamen” no tuvo en cuenta si quiera los dictámenes de pérdida de capacidad previos del demandante; y (iv) no es procedente el reconocimiento del lucro cesante con ocasión a la pérdida de capacidad laboral mencionada en la demanda, toda vez que el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ goza de una pensión de invalidez desde el año 1990 y dicha prestación no ha sido menguada por el accidente de tránsito objeto de litigio.

Respecto a la estimación que realiza la parte demandante por concepto de daño moral en igual medida es improcedente, y su reconocimiento significa un enriquecimiento injustificado en beneficio de la misma, por cuanto: (i) no existe responsabilidad en cabeza de la parte pasiva dentro del presente asunto, (ii) en el plenario de este proceso no se observa ni una sola prueba que indique si quiera sumariamente la existencia de un perjuicio moral que haya sufrido el actor; y (iii) en todo caso, su tasación es exorbitante. Misma suerte que corre los perjuicios reclamados por concepto de daño a la vida en relación.

Por lo tanto, en el caso de marras no es viable el reconocimiento y pago de suma alguna, por cuanto no está demostrada la ocurrencia del riesgo amparado, responsabilidad civil extracontractual. Razón por la cual, de pagar suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro, así como se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del asegurado y eventualmente enriqueciendo al accionante.

En conclusión, como no existe ninguna certeza de los perjuicios pretendidos y mucho menos de

que los mismos hubieren sido causados por el asegurado, reconocerlos con cargo a la Póliza transgrediría en mayor medida el carácter indemnizatorio del contrato de seguro, por lo tanto, deberá el Despacho evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y así evitar un enriquecimiento sin justa causa en beneficio de la parte actora.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

5. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza No. 023128783 / 35 que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de ALLIANZ SEGUROS S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta

conurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”³³ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:

³³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. Exp. 5952.

Coberturas	
Amparos	Valor Asegurado
Responsabilidad Civil Extracontractual	4.000.000.000,00

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis ALLIANZ SEGUROS S.A. no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la Póliza. En todo caso, dicha Póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

6. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

7. EN CUALQUIER CASO, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA EL DEDUCIBLE PACTADO POR LA SUMA DE \$1.800.000.

Subsidiariamente a los argumentos precedentes, sin perjuicio de los fundamentos expuestos a lo largo del escrito y sin que esta mención constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte

de mi representada. En el improbable evento en el que el honorable Despacho considere que la Aseguradora sí tiene la obligación de pagar indemnización alguna, resulta fundamental que tenga en cuenta el deducible pactado en el contrato de seguro que para el caso concreto corresponde a la suma de \$1.800.0000.

Coberturas		
Amparos	Valor Asegurado	Deducible
Responsabilidad Civil Extracontractual	4.000.000.000,00	1.800.000,00

En este orden de ideas, resulta de suma importancia que el Despacho tome en consideración que, tanto la definición del deducible como su forma de aplicación, ha sido ampliamente desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia en distintos conceptos, como el que se expone a continuación:

*“Una de tales modalidades, **la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida**, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.*”

En este orden de ideas, correspondería a las partes en el contrato de seguro determinar el porcentaje de la pérdida que sería asumido por el asegurado a título de deducible, condición que se enmarcaría dentro de las señaladas por el numeral

11 del artículo 1047 del Código de Comercio al referirse a “Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes”³⁴ (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

A su vez, el artículo 1103 del Código de Comercio, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1103. DEDUCIBLE. *Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original.”*

Así las cosas, en el improbable y remoto evento en que el Despacho decidiera desconocer todo lo anteriormente indicado respecto de las razones por las cuales resulta jurídicamente improcedente afectar la póliza de seguro. Deberá tener en cuenta, el deducible plasmado en la imagen anterior, tomada de la póliza de seguro, en la que se indica con precisión que, para la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, el deducible será de \$1.800.000.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

8. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.

Solicito a usted Señor Juez, decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en curso del proceso, y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de mi procurada y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria, incluyendo la

³⁴ Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2016118318-001 del 29 de noviembre de 2016. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, DEDUCIBLE.

de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro (artículo 1081 del Código de Comercio).

CAPÍTULO III

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS DEL DEMANDANTE

- **FRENTE AL DICTAMEN PERICIAL ALLEGADO POR EL EXTREMO ACTOR**

El Solicitante con su escrito de demanda aporta un Dictamen Pericial, sin embargo, es claro que no puede ser tenido en cuenta, dado que no cumple con los requisitos en el artículo 226 del Código General del Proceso, los cuales se estudiarán a continuación en contraste con lo allegado en las pruebas documentales en el presente caso, así:

- *La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere:* Este requisito no se observa en los dictámenes aportados por la parte actora que fueron elaborados por el perito Luis Eduardo Saavedra, como quiera que no se encuentran las publicaciones que este haya realizado sobre el particular. Incumpliendo los requisitos mínimos para que el dictamen aportado pueda ser tenido en cuenta dentro del presente proceso.
- *Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente:* No se encuentra prueba al respecto dentro de las documentales allegadas al proceso con la demanda.
- *Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la*

justificación de la variación: Del dictamen pericial aportado se concluye con una sola lectura que carece de métodos científicos que permitan establecer la veracidad de lo allí enunciado, toda vez que lo informado por el perito no tiene referenciado documento sobre los hechos que versan el litigio. Por lo tanto, no cumple bajo ningún supuesto los requisitos exigidos por la norma.

- *Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.* Del Dictamen Pericial aportado con la demanda, se concluye con una sola lectura que carece de métodos científicos que permitan establecer la veracidad de lo allí enunciado, pues no hace mención a los métodos que se fueron usados. Por lo tanto, no cumple bajo ningún supuesto los requisitos exigidos por la norma.

Debe mencionarse que el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado indica que existe una disminución del 30.93%. Sin embargo, en el Registro Único de Afiliados - RUAF existe un antecedente de pensión de invalidez desde el año 1990, es decir que el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ tuvo que haber sido calificado con un porcentaje igual o superior al 50%, en ese sentido el dictamen aportado y elaborado por el Dr. LUIS EDUARDO SAAVEDRA es cuestionable, pues en este ni si quiera tuvo en cuenta los dictámenes previos, como se visualiza a continuación:

5. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN		
5.1 RELACIÓN DE DOCUMENTOS		
DOCUMENTO	SE TUVO EN CUENTA	
Historia Clínica	X	
Épícrisis o Resumen de Historia Clínica	X	
Exámenes Paraclínicos	X	
Dictámenes y otros		
5.2 DIAGNÓSTICO MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN		
No.	DIAGNÓSTICO	CODIGO CIE-10

En consecuencia, este Despacho debe tener en consideración que el dictamen de pérdida de capacidad laboral es cuestionable, en la medida que no tuvo en cuenta los anteriores dictámenes, que tuvo que realizarse el demandante toda vez que cuenta con una pensión de invalidez; y, debido a que precisamente cuenta con esta pensión es evidente que el actor tuvo que haber sido calificado previamente con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, por lo que es claro que el dictamen que se aporta debería contemplar una calificación superior y dentro del mismo se debía haber contemplado las razones por las cuales se tuvo en cuenta dicho porcentaje en su momento. Por ello, dicha prueba es improcedentes, pues no existe una razón por la cual el señor cuenta con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral menor a la que le tuvieron que otorgar para la adquisición de la pensión de invalidez, pues como se mencionó anteriormente, no se indica si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado el profesional en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias o si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio.

Dicho lo anterior, es claro que no se cumplen expresamente todos los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, razón por la cual, solicito a su Despacho que el Dictamen Pericial aportado con la demanda, no sea tenido como prueba por faltar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el artículo 226 del Código General del Proceso.

De manera subsidiaria, en el evento remoto e improbable evento en que su Despacho decidiera tener como prueba tal Dictamen de pérdida de capacidad laboral, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 228 del Código General de Proceso se solicita la comparecencia del perito para llevar a cabo la contradicción del dictamen de conformidad a la norma procesal que establece lo siguiente.

“ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse

dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuanes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. (...) – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En efecto, tal y como lo dispone el Código General del Proceso se solicita al Despacho la comparecencia al perito LUIS EDUARDO SAAVEDRA, a efectos realizar la contradicción al dictamen pericial denominado “Formulario de Dictamen Valoración del Daño Corporal Perdida de Capacidad Laboral y Ocupacional de Personas Económicamente Activas”, de conformidad tal y como lo dispone la referida norma.

- **RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE TERCEROS**

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

*“Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, **salvo que la parte contraria solicite su***

ratificación. (Subrayado y Negrita fuera de texto)

Entonces, cabe resaltar que Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras ésta no solicite y obtenga su ratificación:

1. Copia de recibo de pago para la realización del examen de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional emitido por LUIS EDUARDO SAAVEDRA.
- **FRENTE A LAS FOTOGRAFÍAS U REGISTROS FÍLMICOS APORTADAS POR EL EXTREMO ACTOR**

Me opongo a que sean tenidas como prueba y se otorgue valor probatorio alguno a las fotografías aportadas por los demandantes junto con el libelo gestor, debe ser claro que, no existe certeza alguna respecto a la autenticidad de las mismas como quiera que estas no fueron aportadas conforme los lineamientos de consagrados en los artículos 9 y 11 de la Ley 527 de 1999 y en tal sentido, no hay forma de verificar la inalterabilidad de las mismas, por tanto, solicito al Despacho no dotar de valor probatorio alguno a tales fotografías.

CAPÍTULO IV

I. MEDIOS DE PRUEBA

1. DOCUMENTALES

- 1.1. Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35, junto con sus condiciones generales.
- 1.2. Comunicación del 01 de enero de 2024 emitida por Allianz Seguros SA
- 1.3. Informe Técnico No. 22772 elaborado por la OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES S.A.S. - NBI.
- 1.4. Derecho de petición elevado a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

2. INTERROGATORIO DE PARTE

- 2.1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, el llamamiento en garantía, las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ** podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 2.2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al representante legal de la demandada y llamante en garantía, **INVERSIONES CADAL S.A.S.**, sea quien sea que haga sus veces, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de llamamiento en garantía, de las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El representante legal podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en el llamamiento.

3. DECLARACIÓN DE PARTE

3.1. Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **ALLIANZ SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda, de los llamamientos en garantía y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Seguro Auto Colectivo Pesados No. 023128783 / 35.

4. TESTIMONIALES

4.1. Solicito se sirva citar al señor **ROGER KEVIN PALACIO DEVIA**, quien hace parte de la Oficina Nacional de Investigaciones S.A.S. - NBI, con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en el Informe Técnico No. 22772 por el suscrito y aportado con las pruebas documentales.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, circunstancias bajo las cuales se produjo el accidente de tránsito de conformidad con lo constatado en el precitado informe. El testigo podrá ser citado en la Avenida Jiménez No. 9 – 43, Oficina 402, de la ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico: info@nbi.com.co.

4.2. Solicito se sirva citar al señor **DIEGO ANDRÉS ARBOLEDA YAÑOZ**, conductor del vehículo de placas HGN819, quien estuvo involucrado en el accidente de tránsito, asimismo esta prueba también se solicita para que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito objeto del presente litigio. El testigo puede ser citado en la Carrera 42 F No. 82 - 106 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) o a su número de celular: 3155397374.

- 4.3. Solicito se sirva citar al señor **ALVARO SEPULVEDA BUELVAS**, conductor del vehículo de placas WEL820 que estuvo involucrado en el accidente de tránsito, quien tiene conocimiento sobre la mecánica del accidente de tránsito. Asimismo, la prueba también se solicita para que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito objeto del presente litigio. El testigo puede ser citado en la Calle 118 No. 11 C - 23 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) o al correo electrónico: alvarojavi-01@hotmail.com.

- 4.4. Solicito se sirva citar al señor **CÉSAR ORLANDO RAMÍREZ CAUSIL**, conductor del vehículo de placas XVI933 que estuvo involucrado en el accidente de tránsito, quien tiene conocimiento sobre la mecánica del accidente de tránsito. Asimismo, la prueba también se solicita para que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito objeto del presente litigio. El testigo puede ser citado en la Carrera 15 No. 2 N – 37, Barrio San Francisco en el municipio La Paz (Cesar) o al número de celular: 3207310322

- 4.5. Solicito se sirva citar al patrullero **JOSÉ DURÁN PÉREZ** con placa policial No. 184858, agente que realizó el Informe Policial de Accidente de Tránsito. Asimismo, la prueba también se solicita para que pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito objeto del presente litigio. El testigo puede ser citado a través de la Secretaría de movilidad de Santa Marta, cuya dirección electrónica es notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co

- 4.6. Solicito se sirva citar a la doctora **MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ**, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda y el llamamiento en garantía, así como de los fundamentos de hecho y derecho sobre la Póliza de Seguro. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza, y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda y el llamamiento.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, tratativas preliminares, vigencia, coberturas, entre otros, del Contrato de Seguro objeto del presente litigio. La testigo podrá ser citada en la Carrera 72 C No. 22 A – 24, Conjunto Residencial Los Cerros de la ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico: camilaortiz27@gmail.com

5. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

- 5.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y siguientes del Código General del Proceso, comedidamente ruego se ordene a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, exhibir en la oportunidad procesal pertinente:
- Copia de la resolución mediante la cual se reconoció al señor **HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ** la pensión de invalidez.

- Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral tomado en consideración para reconocer la pensión de invalidez.
- Certificación donde se informe el estado actual de la pensión de invalidez.

El propósito de la exhibición de estos documentos es evidenciar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le indicó al demandante, los ítems tomados en consideración para dictaminar dicho porcentaje y si en la actualidad el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ recibe tal prestación económica, en aras de demostrar la improcedencia del dictamen pericial aquí aportado. La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** puede ser notificada en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.

6. OFICIOS

6.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y siguientes del Código General del Proceso, comedidamente ruego se oficie a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, para que, con destino al presente proceso, remita en la oportunidad procesal pertinente:

- Copia de la resolución mediante la cual se reconoció al señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ la pensión de invalidez.
- Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral tomado en consideración para reconocer la pensión de invalidez.
- Certificación donde se informe el estado actual de la pensión de invalidez.

Esta solicitud se formula teniendo en cuenta que no es posible obtener esta información por vía del Derecho de Petición en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 10 del

artículo 78 del Código General del Proceso, dado que son documentos sometidos a reserva.

El propósito de la exhibición de estos documentos es evidenciar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le indicó al demandante, los ítems tomados en consideración para dictaminar dicho porcentaje y si en la actualidad el señor HÉCTOR MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ recibe tal prestación económica, en aras de demostrar la improcedencia del dictamen pericial aquí aportado. La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** puede ser notificada en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.

7. DICTAMEN PERICIAL

Comedidamente anuncio que me valdré de prueba pericial de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al Despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo, entre otros, la trayectoria de los vehículos, condiciones de la vía, condiciones climáticas, velocidad de los mismos. Esta se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo y el corto tiempo del traslado de la demanda y del llamamiento en garantía.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a un mes con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior termino, se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida. El dictamen es conducente, pertinente y útil, teniendo en cuenta que el mismo podrá aclarar las

circunstancias fácticas que intervinieron en el accidente de tránsito, las cuales, una vez analizadas, podrán determinar la causa eficiente del mismo.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez, proceder de conformidad.

II. ANEXOS

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de ALLIANZ SEGUROS S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Cali, en el que consta el poder general otorgado al suscrito.
3. Certificado de existencia y representación legal de ALLIANZ SEGUROS S.A., expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

III. NOTIFICACIONES

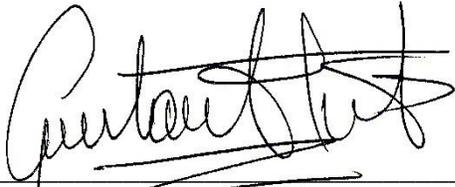
- La parte actora en el lugar indicado en la demanda.
- La llamante en garantía en el lugar indicado en el respectivo llamamiento.
- Mi representada, ALLIANZ SEGUROS S.A. en la Carrera 13 A No. 29 - 24, Piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C.

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@allianz.co

- El suscrito en la Carrera 11 A No. 94 A – 23, Oficina 201, de la ciudad de Bogotá D.C.

Correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C.

T. P. No. 39.116 del C. S. de la J.